



Rama Judicial del Poder Publico
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, D.E.I. y P., treinta (30) de septiembre dos mil veintiuno (2021).

Radicado	08-001-33-33-006-2018-00411-00
Medio de control	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Electricaribe S.A. E.S.P.
Demandado	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Jueza	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

I. ASUNTO A DECIDIR

Procede el Despacho a dictar sentencia dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 13 del Decreto 806 de 2020, en los siguientes términos:

II. ANTECEDENTES

2. DEMANDA

2.1. PRETENSIONES

Como pretensiones de demanda, la actora presentó las que a continuación se transcriben:

- “1. Que se declare la nulidad de la sanción impuesta mediante el artículo 1 de la Resolución SSPD-20178000215325 del 2017-11-02*
- 2. Que se declare la nulidad de la sanción confirmada mediante Resolución SSPD-20188000029515 del 2018-03-27 únicamente en cuanto confirman la sanción impuesta mediante resolución SSPD--20178000215325 del 2017-11-02*
- 3.. Que a título de restablecimiento del derecho se declare que ELECTRICARIBE no está obligada a pagar el valor de la sanción impuesta mediante las resoluciones mencionadas en los dos numerales anteriores.*

2.2. HECHOS.

Al realizar el estudio del cuerpo de la demanda y sus anexos, como fundamentos fácticos de las pretensiones de demanda, se transcriben los siguientes:

- Que en fecha 27 de enero de 2017, la usuaria del servicio NOHORA PINO presentó recurso de reposición ante ELECTRICARIBE S.A E.S.P bajo el radicado RE1170201700277.
- Que la empresa ELECTRICARIBE S.A E.S. P, dio respuesta al recurso antes que se vencieran los 15 días y hace envío de citación para notificación personal el día 13 de febrero de 2017.
- Al no comparecer la usuaria para notificarse personalmente, ELECTRICARIBE S.A. hizo el envío de la notificación por aviso el día 22 de febrero de 2017.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

- Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios formuló pliego de cargos a ELECTRICARIBE y posteriormente la SSPD mediante Resolución 20178000215325 del 2017-11-02 resolvió:

- Sancionar a ELECTRICARIBE S.A. ESP, con multa consistente en \$14.754.340 catorce millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos.
- Reconocer los efectos del silencio administrativo positivo.

- Que mediante Resolución SSPD-20188000029515 del 2018-03-27 fue confirmada la Resolución No. 20178000215325 del 2017-11-02.

2.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO, NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION.

Como fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de su violación, presentó la parte actora los argumentos que a continuación se resumen:

❖ Primer cargo:

Infracción de las normas en que deberían fundarse. Violación del principio de legalidad de las faltas y las sanciones contemplado en el artículo 3 del CPACA. El silencio administrativo positivo no surge por yerros durante el procedimiento de notificación. El artículo 158 de la ley 142 de 1994 únicamente contempla el silencio administrativo positivo por incumplimiento del plazo para dar respuesta.

Manifiesta la empresa accionante, que la sanción interpuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se realizó con violación al artículo 158 de la ley 142 de 1994, toda vez que ELECTRICARIBE S.A E.S. P, cumplió con la obligación de contestar dentro del plazo legal y el silencio administrativo positivo no surge por yerros durante el procedimiento de notificación.

❖ Segundo cargo:

El honorable Tribunal Administrativo del Atlántico coincide en que el vacío contemplado en el artículo 69 del CPACA para la remisión del aviso debe llenarse con la aplicación analógica del artículo 68 del CPACA.

Transcribe la parte actora lo siguiente:

Con respecto a la aplicación analógica del artículo 68 de la ley 1437 de 2011 acerca del envío del aviso el Honorable Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia No. 08001333300320160029801 Magistrado ponente Doctor Ángel Hernández Cano ha manifestado lo siguiente:

"ii) En caso de no comparecer, como el artículo 69 ejusdem no previó el plazo dentro del cual se debe enviar el aviso, a fin de llenar ese vacío deviene procedente aplicar el establecido para el envío de la citación tendiente a la notificación personal, esto es, cinco (5) días, lapso que deviene armónico con la regulación jurídica de los términos notificatorios al interior de eso plexo normativo. Por ello, se estima razonable que dentro de ese lapso se agoten las diligencias tendientes a elaborar y remitir el aviso al peticionario, pues si el legislador estimó conceder cinco (5) días para que compareciera a notificarse personalmente,

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

multatis mutandi, ese mismo plazo resulta posible otorgarlo a la empresa de servicios públicos para la remisión del aviso."

En este sentido toda vez que el artículo 69 del CPACA no estableció un término para la remisión del aviso el vacío normativo debe ser llenado, conforme al Artículo 30, inciso 2 de la Ley 57 de 1887 y artículo 8 de la Ley 153 de 1887 por una disposición que en el mismo CPACA o en otra ley regule una materia semejante.

❖ **Tercer cargo:**

Electricaribe fue sancionada por enviar el aviso por fuera del término previsto en la norma no existe un término para el envío del aviso. La propia Superintendencia de Servicios Públicos lo ha reconocido recientemente en concepto unificador 031 de 2016 y mediante oficio donde solicitó consultar a la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado en relación al plazo del envío del aviso.

Alega Electricaribe que en el caso que nos ocupa, en la Resolución Sancionatoria se indicó:

Las sanciones objeto de demanda deben declararse nulas debido a que la propia Superintendencia ha reconocido con posterioridad a la expedición de las sanciones, que el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 no contempla un término para el envío del aviso, al menos, en dos documentos distintos.

❖ **Cuarto cargo.**

El departamento nacional de planeación coincide en que no hay un plazo para el envío del aviso y adicionalmente ha consultado a la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado.

El Departamento Nacional de Planeación contestó a la Superintendencia, que en efecto no hay un plazo para el envío del aviso, no obstante, esa entidad considera que el aviso debe enviarse con celeridad, conforme a los principios de la actuación administrativa.

❖ **Quinto cargo**

Electricaribe envió el aviso teniendo en cuenta los principios de "eficacia, economía y celeridad"

Señala la demandante que, en los actos administrativos demandados, la Superintendencia sanciona a ELECTRICARIBE por enviar el aviso al sexto día.

Pero la obligación de ELECTRICARIBE, no era enviar el aviso un día cierto, sino actuar conforme a los principios de "eficacia, economía y celeridad", tal como lo han reconocido la Superintendencia y el Departamento Nacional de Planeación.

❖ **Sexto cargo**

Infracción de las normas en que debería fundarse: infracción del artículo 69 de la ley 1437 de 2011 esta norma no establece el término perentorio de un (1) día para enviar la notificación por aviso.

Electricaribe manifiesta que en el caso que nos ocupa la SSPD reconoció un silencio administrativo positivo y sancionó a ELECTRICARIBE al considerar que envió el aviso

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

para notificación del usuario fuera del término fijado por el artículo 69 del CPACA, sin embargo, esa norma no establece ningún término perentorio para el envío del aviso.

❖ Séptimo cargo

La interpretación gramatical del artículo 69 del CPACA, permite concluir que el término de cinco días se refiere al término que tiene el usuario para notificarse personalmente y no al término del envío del aviso.

Aunque inicialmente se puede llegar a la conclusión de que el artículo 69 del CPACA establece que el aviso se debe enviar "al cabo de cinco días", se puede llegar a esta conclusión a partir de una lectura somera de la norma, hasta el punto que incluso la propia Superintendencia ha cambiado de criterio en relación a si existe un plazo para el envío del aviso.

❖ Octavo Cargo

Desconocimiento del derecho al debido proceso al no conceder el recurso de apelación contenido en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994

En la Resolución Sancionatoria se indicó "Contra la presente resolución sólo procede el Recurso de Reposición (...)" y en la Resolución confirmatoria se indicó contra la presente resolución no proceden más recursos por encontrarse agotado el procedimiento administrativo"

❖ Noveno Cargo

Violación al artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

En el presente caso las resoluciones son nulas en razón a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al no haber hecho mención de la procedencia del Recurso de Apelación, violó de esta manera lo estipulado en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

❖ Décimo Cargo

La Superintendencia sancionó sin tener en cuenta que los vicios en la publicidad de los actos administrativos no generan ni la inexistencia ni la invalidez de los mismos.

Dentro del caso objeto en estudio, cabe resaltar que la irregularidad dentro del proceso de notificación no es un factor para reputar la inexistencia o invalidez del acto, pues cuando el respectivo acto se va a publicar ya éste ha reunido los elementos y condiciones estructurales que determinan su existencia y su validez.

2.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.4.1. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

La entidad acusada, al contestar la demanda de la referencia se opuso a las pretensiones de la misma, en los siguientes términos que se resumen:

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

Analizada la normatividad aplicable al caso concreto, es pertinente aclarar que en el tema de servicios públicos domiciliarios, existe una regulación especial para el derecho de petición que proviene del usuario de servicios públicos, que se encuentra consagrada en los artículos 152 y siguientes de la Ley 142 de 1994, y que es aplicable a todos los prestadores de servicios públicos, sin importar su naturaleza jurídica, esto es, si son empresas públicas, privadas o mixtas, comunidades organizadas, empresas industriales y comerciales del Estado o -municipios prestadores directos. De igual manera, el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, establece que las empresas prestadoras de servicios públicos deben expedir las respuestas a las peticiones, quejas y recursos que presenten sus suscriptores o usuarios dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado este término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspicó la demora, o que se requirió la práctica de pruebas, se entenderá que la respuesta se resolvió de manera favorable.

Para efectos del reconocimiento de los efectos del silencio positivo no hay que seguir el procedimiento del artículo 85 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, no se requiere elevar a escritura pública el acto administrativo positivo ficto. Esto significa que el silencio opera de manera automática y la empresa debe, dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los 15 días hábiles, reconocer los efectos del silencio administrativo positivo. Si la empresa no lo hace, el peticionario podrá solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos la aplicación de las sanciones correspondientes. Igualmente, la Superintendencia puede adoptar las medidas para hacer efectivo el silencio.

Por lo que se puede concluir que se configura el silencio administrativo positivo, cuando la empresa no emite la respuesta dentro del plazo de los 15 días y cuando dicha respuesta no se notifica en la forma que señala los artículos 68, 69, 70 y 71 del CPACA.

2.5. ALEGATOS

Electricaribe S.A, E.S.P presentó alegatos de conclusión dentro del término legal ratificando los cargos propuestos con la demanda, al igual que la Superintendencia de Servicios Públicos quien presento alegatos de manera oportuna ratificando los argumentos propuestos en la contestación de la demanda y en las excepciones.

2.6. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio público no emitió pronunciamiento dentro presente proceso.

III. TRAMITE PROCESAL

- La demanda fue presentada el 17 de octubre de 2018 y repartida a esta Judicatura en esa misma fecha. Inadmitida en fecha 13 de noviembre de 2018, y finalmente mediante auto interlocutorio dictado por este Juzgado el 13 de diciembre de 2018 se admitió la demanda, después de haberse subsanado dentro del término legal.
- Surtidos los trámites de notificación, la demanda fue contestada por la Superintendencia mediante escrito de fecha 25 de septiembre de 2019.
- De las excepciones propuestas, se corrió traslado mediante fijación en lista del 03 de marzo de 2020.
- Mediante auto de fecha 24 de mayo de 2021 de conformidad a lo señalado en el artículo 182 A de la Ley 2080 de 2021, se prescinde de la realización de la audiencia inicial, se incorporan pruebas y se fija el litigio.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

- Mediante auto de fecha 04 de junio de 2021, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión.
- Finalmente, y vencido el referido traslado para alegar, ingresa el proceso al Despacho en estado de dictar sentencia.

IV. CONSIDERACIONES.

4.1. Validez de la actuación.

Revisadas las actuaciones procesales, no observa este Juzgado irregularidades procedimentales que conlleven a declarar la nulidad total o parcial de lo actuado.

4.2. Problema jurídico: El problema jurídico en el presente asunto se concreta en determinar si los actos acusados están inmersos en causal de nulidad, de acuerdo a los cargos propuestos en el escrito de demanda, al haberse sancionado a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., por la configuración del silencio administrativo positivo, por no haber notificado por aviso al usuario en debida forma.

Lo anterior pasa por determinar lo siguiente:

Si los trámites de notificación realizados por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., al momento de notificar respuesta al recurso de reposición realizado por la usuaria Nohora Pino, se ajustaron a lo dispuesto en las normas que regulan la materia (artículo 159 de la Ley 142 de 1994 y artículos 67, 68 y 69 del C.P.A.C.A.) en el entendido que la falta de notificación de la respuesta ocasiona el silencio administrativo positivo, origen de la sanción a la prestadora de servicios públicos.

4.3. Tesis del Juzgado: En el presente asunto, el Despacho sostendrá la tesis que ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., al momento de notificar respuesta por aviso a la petición realizada por la usuaria Nohora Pino, no cumplió con las formalidades establecidas en el inciso primero del artículo 69 del C.P.A.C.A para la notificación por aviso, toda vez que a pesar que la empresa accionante no tenía la obligación de remitir el aviso al sexto día restrictivamente de haberse precluido la oportunidad de comparecencia para notificarse personalmente por parte del accionante, la decisión y su notificación no se dieron dentro del término de 15 días que contempla la norma especial, y se realizó en su defecto de manera extemporánea encontrándose aún vigente el término del usuario para comparecer a notificarse personalmente, generándose el silencio administrativo positivo, motivo de la sanción, por lo tanto los actos demandados no se encuentran incursos en las causales de nulidad alegadas.

4.4. Marco jurídico.

➤ ***Sobre la delegación de funciones administrativas.***

A partir de la Constitución Política y del contenido del artículo 9º, 10º y 11º de la Ley en cita, 489 de 1998, el Honorable Consejo de Estado en sentencia con radicado número 11001-03-28-000-2012-00043-00, realizó acertadas conclusiones sobre la figura de la delegación de funciones que ahora hace suyas este Despacho, así:

1. La delegación se erige como una herramienta jurídica de la acción administrativa mediante la cual una autoridad pública, transfiere determinadas funciones o

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

actuaciones específicas a sus colaboradores o a otras autoridades que tengan funciones afines o complementarias, siempre que esté legalmente facultada para ello (artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1998).

2. La delegación administrativa implica: i) El ejercicio, por parte del delegatario, de las atribuciones propias del funcionario delegante; ii) Que la autoridad delegante pueda reasumir en cualquier momento la competencia o funciones delegadas; y, iii) La existencia de autorización legal previa al acto de delegación que deriva de la cláusula general establecida en el artículo 2 de la Ley 489 de 1998, salvo que exista prohibición expresa para delegar.

3. Se concluye así que la Ley 489 de 1998 consagra como cláusula general la autorización legal para que las autoridades administrativas deleguen funciones o asuntos específicos, en todos los casos que no estén expresamente prohibidos y cuando no figuren en el artículo 11 de esa misma Ley.

➤ **Sobre la notificación de decisiones administrativas de entidades prestadoras de servicio público domiciliario.**

El artículo 159 de la Ley 142 de 1994, el cual se refiere al tema de la notificación de las decisiones sobre peticiones y recursos, preceptúa:

"Artículo 159. De la notificación de la decisión sobre peticiones y recursos. La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la forma prevista por el Código Contencioso Administrativo. El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario del de reposición ante el Gerente o el representante legal de la Empresa, quien deberá en tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez presentado este recurso al mismo se le dará el trámite establecido en el Código Contencioso Administrativo.

Si dentro del trámite de la apelación, la Superintendencia de Servicios Públicos estima necesario practicar pruebas o el recurrente las solicita, deberá informar por correo certificado a las partes, con la indicación de la fecha exacta en que vence el término probatorio, que no puede ser superior a treinta (30) días hábiles, prorrogables hasta por otro tanto.

Parágrafo. Una vez presentado en forma subsidiaria el recurso de apelación, las partes podrán sustentar y aportar pruebas a la Superintendencia para que sean tenidas en cuenta al momento de resolver en segunda instancia"

Bajo la anterior premisa normativa, es necesario remitirse a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", en materia de notificaciones, que son del siguiente tenor literal:

ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. *Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.*

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.

4.5. Caso Concreto.

Con la demanda de la referencia, Electricaribe, solicita la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos:

a) Resolución 20178000215325 del 2017-11-02 expedida por la Directora General Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la que impuso multa equivalente a \$14.754.340 catorce millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos en contra de Electricaribe S.A. E.S.P., por encontrarla culpable de la ocurrencia de silencio administrativo positivo en relación con la petición que realizó la usuaria NOHORA PINO.

b) Resolución SSPD-20188000029515 del 2018-03-27, expedida por la Directora General Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la que, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución sanción.

4.5.1. Análisis crítico de los cargos frente a las pruebas y premisas normativas.

Infracción de las normas en que deberían fundarse, violación al principio de legalidad de las faltas y las sanciones contempladas en el artículo 3 del CPACA. El silencio administrativo positivo no surge por yerros durante el procedimiento de notificación. El artículo 158 de la Ley 142 de 1994 únicamente contempla el silencio administrativo positivo por incumplimiento del plazo para dar respuesta.

Manifiesta la empresa accionante que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 contempla la ocurrencia del silencio administrativo positivo, únicamente cuando la empresa no da respuesta a la respectiva solicitud dentro de los 15 días siguientes a ésta.

No obstante, a lo anterior, indica Electricaribe, que en los actos acusados se le impone sanción por la supuesta ocurrencia de silencio administrativo positivo, sin tenerse en cuenta que cumplió con su obligación de responder la solicitud dentro del término de los 15 días referidos.

Valorados los cargos en estudio, precisa el Juzgado que los mismos no ostentan vocación de prosperar.

La tesis anterior, tiene fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que se desarrollan a continuación:

El artículo 158 de la Ley 142 de 1994, impone a las empresas destinatarias de la norma, como Electricaribe S.A. E.S.P. la obligación de responder los recursos, quejas y peticiones dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación del recurso, queja o petición.

La misma norma contiene una sanción para los casos en que la empresa no cumpla con la obligación de responder dentro del término aludido, dicha sanción consiste en que frente a la omisión de la empresa se entiende configurado un silencio administrativo positivo a favor del peticionario.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

Al respecto, así reza la norma en cita:

“Artículo 158. Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspicio la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él”.

Ahora bien, dicho artículo si bien establece el término en el cual deben resolverse las quejas y peticiones, no indica la forma en que deben notificarse las respectivas respuestas. Esa forma de notificación se encuentra regulada es en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, el cual preceptúa lo siguiente:

“Artículo 159. De la notificación de la decisión sobre peticiones y recursos. La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la forma prevista por el Código Contencioso Administrativo. El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario del de reposición ante el Gerente o el representante legal de la Empresa, quien deberá en tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez presentado este recurso al mismo se le dará el trámite establecido en el Código Contencioso Administrativo.

(...).”

Véase entonces, como la misma Ley que la parte actora utiliza para fundamentar el presente cargo, para efectos de notificación de la respectiva respuesta, remite a la Ley 1437 de 2011. Bien, dicha Ley 1437, en cuanto a las notificaciones reza en sus artículos 68 y 69 lo siguiente:

“Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días.” (Subrayado fuera de texto)

“ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiese hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal”.

Conforme lo anterior, teniendo en cuenta la articulación existente entre los artículos 158 y 159 de la Ley 142 de 1994, con los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, de la cual se desprende que, la obligación so pena de ocurrencia de silencio administrativo positivo que tiene Electricaribe, no solo se reduce a contestar la reclamación administrativa dentro de los 15 días siguientes a su presentación, sino que va más allá y abarca también el envío de la citación para notificación personal de la respuesta y el aviso en los casos que sea procedente, dentro de los términos que la ley otorga para ello.

Cargos de nulidad segundo, Tercero, cuarto, Quinto, Sexto, y Séptimo

Como soporte de la solicitud de nulidad, la parte actora presenta variados cargos de nulidad que el Despacho por técnica judicial resolverá de la siguiente manera, teniendo en cuenta que los cargos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y séptimo, comparten la misma argumentación jurídica que, de manera transversal ataca los mismos puntos de derecho, nos pronunciaremos sobre estos de manera conjunta, avizorando que no poseen vocación de prosperidad de conformidad al análisis que entraremos a realizar de manera inmediata.

Procede entonces el Despacho a estudiar los fundamentos propuestos por la parte actora para soportar los cargos.

El aspecto medular del presente juicio se cierne en establecer a quién le asiste la razón en la manera cómo deben interpretarse armónicamente los artículos 69 del C.P.A.C.A. y 158 de la Ley 142 de 1994.

Este cuestionamiento se concreta en como la SSPD entiende el surtimiento de la notificación por aviso, interpretación según la cual, el momento para enviar esa comunicación corresponde, al día hábil siguiente a la consumación del plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la citación, esto es, al día sexto, puesto que, en su opinión, para garantizar a los usuarios y/o suscriptores sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, no basta que la respuesta sea expedida dentro del término legal, sino además, debe ser puesta en conocimiento de aquellos que, lo debe hacer sirviéndose de la notificación por aviso, ello supone que el envío de la comunicación deba surtir inmediatamente fenecido el plazo en que no fue posible notificarlos personalmente.

Pues bien, esta agencia judicial considera que las posturas que frente a la notificación por aviso fueron denotadas por los extremos del juicio, se contraponen, aun perteneciendo a un mismo método de interpretación legal, que no es otro que, *el gramatical o textualista*.

Frente a esto, empecemos señalando que, la doctrina ha establecido la existencia de diversos criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas a fin de desentrañar pasajes oscuros o poco claros de las normas, o servir como instrumentos de guía al Juez para atribuir determinado significado al ordenamiento jurídico. Esos criterios de interpretación son: gramatical, lógico, histórico, sistemático, teleológico, pragmático-consecuencialista, criterio valorativo y de ponderación de intereses y el criterio del precedente.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

En lo que corresponde a la legislación colombiana, los artículos 27 al 30 del Código Civil recogen, en suma, los métodos de interpretación establecidos por Savigny, a saber: los criterios gramatical, sistemático, histórico y teleológico, de los cuales, para el presente asunto, hemos de abordar únicamente, dos, el gramatical y el sistemático.

Así pues tenemos que, el criterio de interpretación gramatical de una determinada disposición hace referencia a la formulación de normas jurídicas con fundamento esencialmente, en dos tipos de ejercicios por parte del intérprete, **i)** El primero, que refiere al entendimiento de la estructura sintáctica de la disposición, a fin de comprender los signos gramaticales, la naturaleza de los enunciados allí fijados (sujeto, verbo, predicado, etc), su función y las repercusiones para el entendimiento de la estructura de la oración; y **ii)** Segundo, consistente en la comprensión semántica de los términos que componen la disposición jurídica, punto en el que se ha establecido que hay lugar a interpretar las palabras bien sea en el sentido natural y obvio, el que la comunidad de hablantes le haya atribuido o siguiendo los significados técnicos que tengan, si es del caso.

En este orden de ideas, esta es la base legal para que los operadores jurídicos, en general, fundamenten la aplicación de los términos mencionados en la ley y que no encuentren significado distinto al establecido textualmente dentro del ordenamiento jurídico.

Por su parte, el criterio sistemático refiere a que la norma que se extraiga de una disposición jurídica debe encontrarse en armonía con otras normas, fines o principios del ordenamiento jurídico, de tal modo que no exista contradicciones, incompatibilidad o incongruencia entre diversas disposiciones que componen un conjunto normativo.

Este criterio obedece a la idea según la cual, el ordenamiento jurídico puede ser concebido bajo la idea de un sistema, de allí, entonces, que la coherencia y la unidad se califiquen como sus características. Esto implica, entonces, que por vía de este método puede el intérprete limitar, precisar o ampliar el radio de acción de una determinada disposición al contrastarla con otras normas consonantes con la materia que trata, pues toda disposición ha sido proferida en el marco de un amplio conjunto de disposiciones de igual jerarquía, con las que debe operar de manera consonante.

Precisa en qué consisten cada uno de los criterios de interpretación citados, viene al caso indicar que esa disposición superior a la que alude el criterio sistemático, para el caso que nos convoca, no es más que el debido proceso, derecho constitucional fundamental regulado en el artículo 29 de la Constitución Política, aplicable a toda clase de actuaciones administrativas y judiciales.

En este asunto, hemos de advertir que en disenso a lo denotado por los sujetos procesales en el objetivo de auscultar el sentido y alcance del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, nuestra posición interpretativa corresponde al *criterio sistemático*.

Bajo este método interpretativo tenemos que, si por la notificación se propugna el conocimiento real de las decisiones judiciales o administrativas con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso, y ello tiene por objetivo, delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes, el entendimiento que se le deba predicar al artículo 69 dependerá, de cómo se integre armónicamente la carga de la administración de adelantar oportunamente las diligencias de notificación y el deber de los administrados de comparecer dentro del término legal a notificarse de aquellas personalmente; porque esas cargas y deberes terminan siendo correlativos, por comportar garantías para ambas partes y no tan solo para una de ellas.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERSERVICIOS.

Por consiguiente, frente al cumplimiento de la carga de expedir la respuesta y notificarla al administrado oportunamente, le figura al ciudadano el no rehusarse de comparecer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al momento en que recibió la citación.

Sin embargo, de vencerse el plazo sin que, por alguna razón aceptable o no, aquel acuda a notificarse personalmente, el punto de partida para acometer el envío del aviso para la administración, dependerá del día a partir del cual el destinatario haya efectivamente recibido la citación en el lugar que indicó donde recibiría notificaciones, esto, para los casos en que la administración tenga conocimiento del domicilio o residencia del destinatario de la notificación y la citación no haya sido devuelta, dando cuenta de esto, la empresa de correos que haya adelantado la entrega de la comunicación, si es por este medio que fue surtida la diligencia.

Sería algo paradójico, que so capa de propugnar en la salvaguarda de las garantías fundamentales de los ciudadanos, por una interpretación gramatical con imposición de condiciones o plazos inexistentes a lo establecido objetivamente, las autoridades terminarán cercenándoles a los ciudadanos el plazo que tienen para comparecer a notificarse personalmente, por el simple apremio del vencimiento del plazo contado a partir del día en que fue remitida la primera comunicación.

Aunque el tenor del artículo 69 del C.P.A.C.A así parezca indicarlo, el sentido gramatical no puede imponerse de manera aislada a los principios constitucionales, porque, se reitera, bajo una metodología sistemática se puede vislumbrar que, el solo vencimiento del plazo desde el envío del aviso no es suficiente para imponerle a la administración el ejercicio de una carga que solo surgirá de inmediato, si transcurrido ese tiempo hay certeza del recibo de la primera comunicación por el administrado.

Las anteriores observaciones dejan claro que el uso de la interpretación textual de las palabras de la ley no puede ser tenido como único, exclusivo o excluyente criterio clarificador del sentido y alcance de un enunciado.

Recuérdese que, en el derecho fundamental al debido proceso, en el particular aspecto de las notificaciones, puede desarrollarse bajo la loable intención institucional de velar por un proceso breve, expedito y dinámico, pero que respete por igual, los intereses del ciudadano y de la administración, al tiempo que no debe pasarse por alto el abuso de las posiciones dominantes, tampoco debe auspiciarse que los administrados resulten cobijados de beneficios, cuando provengan de la renuencia, de la desidia, o como lo dijera el Consejo de Estado, - *por una conducta del propio interesado que pretende entorpecer las funciones de la administración e impide que se surta con éxito la notificación.*

Entonces, bajo las consideraciones anteriores, se tiene que, no estaba obligada Electricaribe S.A. a remitir al usuario la respectiva notificación por aviso, un (1) día después del vencimiento de los 5 días correspondientes al envío de citación para notificación personal, toda vez que dicho término se debe comenzar a contabilizar desde el día siguiente en que efectivamente es recibida tal citación por parte del usuario. Pero si Electricaribe S.A. E.S.P., realizaba las diligencias de notificación personal y por aviso, dentro del plazo de 15 días que consagran las normas para responder y notificar la respuesta, dicho trámite resultaba válido y ajustado a derecho.

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta la articulación existente entre los artículos 158 y 159 de la Ley 142 de 1994, con los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, de la cual se desprende que la obligación so pena de ocurrencia de silencio administrativo positivo que tiene Electricaribe, no solo se reduce a contestar la reclamación administrativa dentro de los 15 días siguientes a su presentación, sino que va más allá y abarca también el

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

envió de la citación para notificación personal de la respuesta y el aviso en los casos que sea procedente, dentro de los términos que la ley otorga para ello, y se soporta de acuerdo al contenido de las pruebas documentales existentes en el expediente, tenemos que, Electricaribe no cumplió con su obligación de enviar la notificación por aviso dentro del término legal establecido en la ley 1474 de 2011, es decir al cabo del quinto (5) día del envío y recepción por parte del usuario de la citación para notificación personal, toda vez que la misma se realiza aun estando vigente el término del usuario para comparecer a notificarse personalmente, por lo tanto el despacho descarta la prosperidad de los anteriores cargos de nulidad estudiados, toda vez que a pesar de no existir la obligación de enviar el aviso al sexto día de manera restrictiva, este se realizó de manera extemporánea.

A propósito, véase:

- El **27 de enero de 2017**, la usuaria Nohora Pino presentó recurso de reposición a Electricaribe S.A. E.S.P.

- A partir de la solicitud presentada, la empresa contaba con quince (15) días hábiles para proferir la respectiva respuesta, los cuales vencían el **16 de febrero de 2017**, profiriendo decisión empresarial en término en fecha **10 de febrero de 2017**.

- El **13 de febrero de 2017** se remite citación de notificación personal, recibida en fecha **14 de febrero de 2017**, teniendo el usuario entre el **15 de febrero y el 22 de febrero de 2017** para comparecer a notificarse personalmente, por lo cual la notificación por aviso debió remitirse de conformidad a la normatividad estudiada a partir del día **23 de febrero de 2017**, y no el **22 de febrero** como efectivamente se encuentra soportado en el plenario, por lo cual se concluye que el trámite de notificación se realizó indebidamente, vulnerándose el debido proceso administrativo, toda vez que al enviarse la notificación por aviso antes de haberse culminado el término dispuesto por la Ley para que la usuario accediera a comparecer para recibir la notificación personal, se está recortando el derecho que le asiste a la usuaria de contar con un término amplio de (5) días, y se estaría concediendo un término menor, desconociendo los principios que rigen la actuación administrativa, como lo son el debido proceso, en el entendido que la actuación administrativa, no se rige solamente por la normatividad específica que la regula, sino también en virtud de la integración normativa, se deberán atender principios normas de carácter Constitucional .

Desconocimiento del derecho al debido proceso al no conceder el recurso de apelación contenido en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994

Manifiesta Electricaribe que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que siendo obligatorio ello, no le concedieron la oportunidad de interponer en su contra respectivo recurso de apelación, como lo exigen los artículos 113 de la Ley 142 de 1994 y 67 de la Ley 1437 de 2011.

Valorado el soporte argumentativo del cargo en estudio, no ostenta vocación de prosperar.

La tesis anterior, tiene fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que el Juzgado desarrolla a continuación:

La figura de delegación de funciones está consagrada constitucionalmente en el artículo 211, en los siguientes términos:

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

“Artículo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios”.

Nótese que nuestra Constitución Política si bien permite la delegación de funciones a nivel administrativo, no contiene definición de la misma ni los requisitos que deben gobernarla.

A propósito, el artículo 211 *ibídem* al referirse a la citada delegación, entre otras cosas, indica que es la Ley quien señalará las funciones que pueden delegarse y los recursos que proceden contra los actos de los delegatarios.

En este panorama encuentra el Juzgado que, en desarrollo del citado artículo, el Congreso de la República, el 29 de diciembre de 1998, expidió la Ley 489 a través de la cual reestructuró la organización y funcionamiento de las entidades y definió la delegación en los términos que hoy se conocen. En tal virtud, la Ley expresó que la regulación normativa de la delegación de funciones le es aplicable a:

“...todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública...” y, en lo pertinente, a las entidades territoriales, *“sin perjuicio de la autonomía que les es propia de acuerdo con la Constitución Política”.*

Ahora bien, dicho Congreso de la República en los artículos 9º, 10º y 11º de la Ley en cita, 489 de 1998, indicó la clase de funciones que pueden ser delegadas con especificación de los requisitos para ello y de las autoridades destinatarias de la figura de la delegación. Igualmente, el Legislador se ocupó en dichos artículos de incluir elementos esenciales de la figura tratada que permiten llegar a una definición conceptual de la delegación, así como a la dimensión de sus efectos o alcances.

Al respecto, precisa el Juzgado que el siguiente es el tenor literal de los referidos artículos:

“ARTICULO 9o. DELEGACION. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley.

PARAGRAFO. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos.

ARTICULO 10. REQUISITOS DE LA DELEGACION. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren.

- *El Presidente de la República, los ministros, los directores de departamento administrativo y los representantes legales de entidades descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas.*

ARTICULO 11. FUNCIONES QUE NO SE PUEDEN DELEGAR. Sin perjuicio de lo que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante delegación:

- *1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley.*
- *2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación.*
- *3. Las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son -*
- *susceptibles de delegación”.*

Pues bien, a partir del contenido de las normas transcritas, el Honorable Consejo de Estado en sentencia con radicado número 11001-03-28-000-2012-00043-00, realizó acertadas conclusiones sobre la figura de la delegación de funciones que ahora hace suyas este Despacho, así:

1. La delegación se erige como una herramienta jurídica de la acción administrativa mediante la cual una autoridad pública, transfiere determinadas funciones o actuaciones específicas a sus colaboradores o a otras autoridades que tengan funciones afines o complementarias, siempre que esté legalmente facultada para ello (artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1998).

2. La delegación administrativa implica: i) el ejercicio, por parte del delegatario, de las atribuciones propias del funcionario delegante; ii) que la autoridad delegante pueda reasumir en cualquier momento la competencia o funciones delegadas; y, iii) la existencia de autorización legal previa al acto de delegación que deriva de la cláusula general establecida en el artículo 2 de la Ley 489 de 1998, salvo que exista prohibición expresa para delegar.

3. Se concluye así que la Ley 489 de 1998 consagra como cláusula general la autorización legal para que las autoridades administrativas deleguen funciones o asuntos específicos, en todos los casos que no estén expresamente prohibidos y cuando no figuren en el artículo 11 de esa misma Ley.

En esta medida, resalta el Despacho tal y como se desprende de los considerandos normativos anotados y de la expresa jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado que así lo consagra, que, en materia de delegación de funciones administrativas, la Ley 489 de 1998 oficia como clausula general que regula la materia dentro de todo el territorio colombiano. Ello, implica que todas las actuaciones referidas a la delegación que se

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

realicen en este país, deben respetar lo dispuesto en dicha Ley siempre y cuando su aplicación no se encuentre prohibida expresamente.

Aclarado lo anterior precisa el Juzgado que el artículo 12¹ de la Ley en cita, al referirse al “*REGIMEN DE LOS ACTOS DEL DELEGATARIO*” señala que los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.

De este modo al pertenecer el artículo 12 en cita a la cláusula general de la delegación de funciones en materia administrativa dentro del territorio colombiano, claro es que la expedición de las Resoluciones acusadas en lo que no esté regulado por la Ley 142 de 1994 y verse sobre delegación se regula por el contenido de la Ley 489 de 1998.

Ahora, el cargo de nulidad que aquí propone Electricaribe S.A. E.S.P. lo fundamenta en el hecho que en las Resoluciones acusadas no se le otorgó la posibilidad de interponer recurso de apelación a pesar de que el artículo 113 de la Ley 142 de 1994² preceptúa que cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los actos de los delegados cabrá el recurso de apelación y dichas resoluciones fueron expedidas en virtud de Delegación que recibió el Director Regional Norte de la Superintendencia por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Dicho cargo, como se dijo arriba no tiene vocación de prosperar, por lo siguiente:

Al ser parte los actos administrativos acusados del ordenamiento jurídico colombiano, deben someterse en cuanto a la delegación de funciones, a lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 como cláusula general de delegación de funciones administrativas.

En esta medida, si bien los actos administrativos referidos fueron dictados con ocasión a la prestación de un servicio público domiciliario lo que hace aplicar a la Ley 142 de 1994, claro es que en virtud de ser la Ley 489 de 1998 cláusula general en delegación de funciones administrativas, en todo aquello que no esté prohibido expresamente debe darse aplicación a la Ley 489.

Otra de las razones que hacen menester la aplicación de la Ley 489 de 1998 al presente caso, lo comporta el hecho que el objeto controvertido en este cargo de nulidad es

¹ “ARTICULO 12. *REGIMEN DE LOS ACTOS DEL DELEGATARIO*. Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo.

PARAGRAFO. En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente principal”.

² “Artículo 113. *Recursos contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones administrativas. Salvo esta Ley disponga otra cosa, contra las decisiones de los personeros, de los alcaldes, de los gobernadores, de los ministros, del Superintendente de Servicios Públicos, y de las comisiones de regulación que pongan fin a las actuaciones administrativas sólo cabe el recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación o publicación.*

Pero, cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los actos de los delegados cabrá el recurso de apelación. Durante el trámite de los recursos pueden completarse las pruebas que no se hubiesen alcanzado a practicar”.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

procesal administrativo, referente a la procedencia del recurso de apelación de un acto administrativo expedido en virtud de delegación, escenario en el cual debe atenderse ineludiblemente a la cláusula general que regula la materia, esto es la Ley 489 de 1998.

Sumado a lo anterior tenemos que, para efectos del ejercicio de las funciones delegadas la Ley 489 de 1998 cobra carácter especial en tanto que dicha Ley (i) regula el ejercicio de la función administrativa y fija las reglas básicas del funcionamiento de la Administración Pública, pero también, tiene como fuente a (i) los artículos 209 y 211 de la Constitución Política que regulan a la delegación administrativa.

Con lo anterior claro, desciende nuevamente el Juzgado sobre el expediente de la referencia encontrando que la consagración hecha por la Directora Territorial de la Superintendencia en la Resolución Sanción, referente a que contra ella únicamente procedía el recurso de reposición, respetó la regulación normativa aplicable a la materia, en tanto que el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, cláusula general de la delegación administrativa, preceptúa que a los actos expedidos por el delegatario le serán procedente los mismos recursos procedentes por el delegante que en este caso es el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios cuyos actos administrativos no son susceptibles de ser apelados está acorde a la normatividad aplicable.

Conforme a las consideraciones anteriores se declara no probado este cargo de nulidad.

Violación al artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Respecto al presente cargo alega la demandante que las resoluciones son nulas en razón a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no realizó mención de la procedencia del Recurso de Apelación, violando de esta manera lo estipulado en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De manera directa el juzgado despacha desfavorablemente el presente cargo de nulidad, atendiendo los argumentos señalados en la resolución del cargo anterior, toda vez que, al no ser procedente el recurso de apelación sobre los autos demandados, no se vulnera lo establecido en el artículo 67 del CPACA, por lo cual no se encuentra desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos.

La superintendencia sancionó sin tener en cuenta que los vicios en la publicidad de los actos administrativos no generan ni la inexistencia ni la invalidez de los mismos.

Agrega Electricaribe que la irregularidad dentro del proceso de notificación no es un factor para reputar la inexistencia o invalidez del acto, pues cuando el respectivo acto se va a publicar ya éste ha reunido los elementos y condiciones estructurales que determinan su existencia y su validez.

Para el Despacho no se necesitan mayores elucubraciones para concluir que el cargo presentado, al igual que los estudiados precedentemente, tampoco tiene vocación de prosperar, toda vez que al revisar los actos administrativos acusados, se observa que las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Servicios Públicos no fueron las de declarar la inexistencia o invalidez de manera directa de alguna decisión tomada por Electricaribe, sino la de reconocer conforme a las normas aplicables para el caso, un silencio administrativo positivo establecido en la legislación vigente.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

En tal virtud, los efectos que genere el reconocimiento de ese silencio administrativo positivo deben aplicarse forzosamente en virtud de la eficacia de las normas que lo regulan. En ese panorama, no le es dable a Electricaribe S.A. E.S.P., oponerse a la efectividad de la norma que lo que busca es materializar los derechos y deberes que ellas mismas imponen.

4.5.2. Conclusión.

Una de las características de los actos administrativos acusados es la presunción de legalidad, lo que concordado con el art. 167 del C.G.P), impone a quien pretende la nulidad de dichos actos administrativos, la carga de demostrar la ocurrencia de los cargos de nulidad que proponga en contra de esos actos.

Pues bien, en el presente caso se evidenció que ninguno de los cargos propuestos por Electricaribe S.A. E.S.P. tuvo vocación de prosperar y se declararon no probados, por lo que la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos acusados se encuentra incólume, esto es, no fue desvirtuada.

En este panorama menester es negar todas las pretensiones de la demanda de la referencia, lo cual se hará en la parte resolutive de esta sentencia.

V. CONDENA EN COSTAS

Finalmente, el Juzgado no condenará en costas, en razón de que la parte vencida no asumió en el proceso una conducta que la hiciera merecedora a ello, tal como el haber incurrido en temeridad, irracionalidad absoluta de su pretensión, en dilación sistemática del trámite o en deslealtad.

En mérito de lo expuesto, **el Juzgado Sexto (06) Administrativo Oral de Barranquilla**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR, conforme a la parte motiva de esta sentencia, todas las pretensiones de la demanda de la referencia.

SEGUNDO: Sin en costas en esta instancia.

TERCERO: NOTIFICAR personalmente esta providencia a la señora Procuradora delegada del Ministerio Público ante este Juzgado.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, **ARCHÍVESE** el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ

Juez
L.P.V

Firmado Por:

Lilia Yaneth Alvarez Quiroz
 Juez Circuito
 Juzgado Administrativo
 Contencioso 006 Administrativa
 Barranquilla - Atlantico

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00411-00

Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Demandado: SUPERSERVICIOS.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f37abafd3c0322a944247560eec523a012b2bb0f701da7d1cd18b170dd80f94b**

Documento generado en 30/09/2021 06:08:15 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>